



**JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
TJA-334/2020-JM**

ACTOR

[REDACTED]

AUTORIDADES DEMANDADAS

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
COLIMA Y TESORERO MUNICIPAL DE ESE
MISMO AYUNTAMIENTO**

MAGISTRADO PONENTE

JUAN MANUEL FIGUEROA LÓPEZ

SENTENCIA DEFINITIVA

Colima, Colima, **ocho de octubre de dos mil veinte.**

VISTO para resolver en definitiva el juicio contencioso administrativo radicado bajo número TJA-334/2020-JM encontrándose debidamente integrado el expediente para su resolución, y

1

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Presentación de la demanda

Mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil veinte, la [REDACTED] demandó al Ayuntamiento Constitucional de Colima y a la Tesorería de ese mismo Ayuntamiento, e impugnó la nulidad del cobro y correspondiente pago y devolución del Derecho de Alumbrado Público, solicitando la suspensión del acto reclamado.

SEGUNDO. Admisión de la demanda

Mediante acuerdo de quince de julio de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió la referida demanda, teniendo a [REDACTED] demandando al Ayuntamiento Constitucional de Colima y Tesorero de ese mismo Ayuntamiento, la nulidad del cobro y correspondiente pago y



devolución del Derecho de Alumbrado Público, solicitando la suspensión del acto reclamado.

TERCERO. Admisión de pruebas ofrecidas por el actor

En el auto de radicación mencionado y de conformidad a los artículos 97, 98 y 99 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, se tuvieron por admitidas a la parte actora las siguientes pruebas: DOCUMENTAL. Consistente en original de aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, correspondiente al número de servicio [REDACTED] PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Pruebas que se desahogan por su propia naturaleza

Asimismo, se requirió a la parte actora para que dentro del término de 03 días presentara la documental que ofrece como prueba consistente en: Comprobante de pago de Energía Eléctrica correspondiente al número de servicio [REDACTED] apercibiendo que en caso de no cumplir se le tendrá por no admitida tal probanza.

2

Además, se concedió a la parte actora la suspensión del acto reclamado para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, hasta en tanto sea dictada sentencia definitiva dentro del presente juicio.

Por otra parte, en dicho auto se ordenó correr traslado de la demanda a las autoridades responsables para que dentro del término legal concedido manifestaran lo que a su derecho conviniera.

CUARTO. Contestación de las autoridades demandadas



Mediante acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a las autoridades demandadas informando el cumplimiento a la suspensión concedida a la parte actora y dando contestación a la demanda.

QUINTO. Admisión de pruebas ofrecidas por las autoridades demandadas

En el acuerdo de referencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 97, 98 y 99 de la Ley de Justicia Administrativa, a las autoridades demandadas se les tuvieron por ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 1.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 2.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Pruebas que se desahogan por su propia naturaleza.

Por otro lado, se le tuvo por no ofrecida a la parte actora la documental consistente en comprobante de pago de energía eléctrica, correspondiente al número de servicio [REDACTED] en virtud de que no diera cumplimiento al requerimiento formulado en el diverso proveído de quince de julio de dos mil veinte.

3

SEXTO. Alegatos

En el auto de referencia de conformidad a lo establecido en el artículo 75 de la Ley de la materia, se le concedió el término legal a las partes a fin de que formularan sus alegatos por escrito; en el entendido que una vez fenecido el plazo, se turnaría el expediente en que se actúa para el dictado de la sentencia definitiva.

SÉPTIMO. Turno del expediente para el dictado de la sentencia

Transcurrido el término que les fuera concedido, las partes no presentaron sus correspondientes alegatos, en consecuencia, fueron



turnados los autos del presente juicio contencioso administrativo para el dictado de la sentencia definitiva.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima (en adelante **Tribunal de Justicia Administrativa**), es en términos de lo dispuesto por los artículos 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción IV y 12 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 22 y 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, 2, 5, 6, 7, 8, 38 y 39 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima (en adelante **Ley de Justicia Administrativa**) y 1, 2 y 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima (en adelante **Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa**), un órgano constitucional local autónomo a cargo de la función jurisdiccional especializada en materia administrativa, incluyendo la fiscal y de responsabilidades de servidores públicos, con competencia para dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y la Administración Pública del Estado y los municipios.

4

Asimismo, es el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos del Estado y los municipios por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias por los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública, o al patrimonio de los entes públicos, del Estado y los municipios.

Por tanto, el Tribunal es competente para conocer y resolver el presente juicio contencioso administrativo al encontrarse dotado de plena autonomía y jurisdicción para dictar y ejecutar sus sentencias, de conformidad a lo señalado por los artículos 117 de la Ley de Justicia



Administrativa y 66 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa.

SEGUNDO. Legitimación procesal

Con fundamento en los artículos 47 párrafo 1, fracciones I y II, inciso a) y 51 de la Ley de Justicia Administrativa, y derivado del examen de las constancias que obran en el presente expediente, este órgano jurisdiccional reconoce la legitimación procesal de la parte actora y de las autoridades demandadas en el juicio que nos ocupa.

TERCERO. Precisión de los actos impugnados

Al realizar el análisis integral del escrito de demanda y documentos que se anexaron junto aquélla, se obtiene que esencialmente se impugnan los siguientes actos administrativos:

I. La nulidad del cobro y correspondiente pago y devolución del pago de Derecho de Alumbrado Público relativo al número de servicio

5

Robustece lo anterior, el siguiente criterio orientador:

“Época: Décima Época. Registro: 2014827. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV. Materia(s): Administrativa. Tesis: VII.1o.A.19 A (10a.). Página: 2830.

DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ. SU ESTUDIO DEBE SER INTEGRAL.

Del artículo 325 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, se colige que las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial local deben resolver la pretensión efectivamente planteada en la demanda de nulidad, previa fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, y suplir la deficiencia de la queja en los casos previstos por dicha norma; de ahí que ese escrito inicial constituye un todo y su análisis no debe circunscribirse al apartado de los conceptos de impugnación, sino a cualquier parte de éste donde se advierta la exposición de motivos esenciales de la causa de pedir, como lo ordena el propio



precepto 325 en su fracción IV, al disponer que las sentencias del órgano jurisdiccional referido contendrán el "análisis de todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados.", lo cual implica que el estudio de la demanda en el juicio contencioso administrativo debe ser integral y no en razón de uno de sus componentes."

CUARTO. Análisis de las pruebas

Atendiendo lo dispuesto por los artículos 111 y 117, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa, se procede a valorar las pruebas previamente desahogadas en el juicio, de acuerdo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.

I. Pruebas de la parte actora

En términos de lo dispuesto en el artículo 413 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Colima (en adelante **Código supletorio de la ley de la materia**), supletorio de la Ley de Justicia Administrativa,¹ se otorga **pleno valor probatorio** a la **documental privada** consistente en el aviso - recibo de la Comisión Federal de Electricidad, referente al número de servicio: [REDACTED]

6

Se concede **pleno valor probatorio** a la **instrumental de actuaciones**, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 412 del Código supletorio de la ley de la materia.

Asimismo, en lo que respecta a la prueba **presuncional en su aspecto legal** de conformidad con el artículo del artículo 420 del Código supletorio de la ley de la materia, administrada con el resto del caudal probatorio, se le reconoce **pleno valor probatorio**; mientras que la

¹ Cfr. El artículo 38 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, el cual señala que los juicios que se promuevan ante el Tribunal, se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala dicha ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a los que prescribe ese ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el **Código de Procedimientos Civiles para el Estado**.



presuncional en su aspecto humano en términos del artículo 422 del Código supletorio referido, se le otorga **valor indiciario**.

I. Pruebas de la parte demandada

Se concede **pleno valor probatorio** a la instrumental de actuaciones, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 412 del Código supletorio de la ley de la materia.

Asimismo, en lo que respecta a la prueba presuncional en su aspecto legal de conformidad con el artículo del artículo 420 del Código supletorio de la ley de la materia, administrada con el resto del caudal probatorio, se le reconoce **pleno valor probatorio**; mientras que la presuncional en su aspecto humano en términos del artículo 422 del Código supletorio referido, se le otorga **valor indiciario**.

QUINTO. Causal de improcedencia

En términos de lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley de Justicia Administrativa, se procede en primer término al análisis de las causas de improcedencia y de sobreseimiento que pudieran advertirse de las manifestaciones de las partes o que operen de oficio en términos de la ley de la materia, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente.

Del análisis integral del escrito de contestación de las autoridades demandadas se obtiene que éstas no hicieron valer causal de improcedencia alguna en su escrito de contestación de demanda. Aunado a ello, este Tribunal de oficio no advierte que se actualice alguna causa de improcedencia ni de sobreseimiento, por tanto, se procede al estudio de fondo con relación a la legalidad del acto impugnado.

SEXTO. Agravios y manifestaciones de las partes



Partiendo del principio de economía procesal y sobre todo porque no constituye obligación legal su inclusión en el texto de la sentencia, se estima que en la especie resulta innecesario transcribir los hechos y agravios esgrimidos por la parte actora, toda vez que obran en el expediente del presente juicio y se tienen a la vista para su debido análisis, por lo que como se ha señalado, resulta innecesaria además de impráctica su transcripción.

Robustecen lo anterior, *mutatis mutandis*, los siguientes criterios jurisprudenciales:

“Época: Novena Época. Registro: 166521. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Febrero de 2008, Tomo XXVII. Materia(s): Común. Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/30 Página: 2789.

AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO EN REVISIÓN.

La omisión de los Tribunales Colegiados de Circuito de no transcribir en las sentencias los agravios hechos valer, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo a la cual sujetan su actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a las partes, pues respecto de la quejosa o recurrente, es de ésta de quien provienen y, por lo mismo, obran en autos, mientras que al tercero perjudicado o demás partes legitimadas se les corre traslado con una copia de ellos al efectuarse su emplazamiento o notificación, máxime que, para resolver la controversia planteada, el tribunal debe analizar los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados o la resolución recurrida conforme a los preceptos constitucionales y legales aplicables, pero siempre con relación a los agravios expresados para combatirlos.

Época: Novena Época. Registro: 166520. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Septiembre de 2009, Tomo XXX. Materia(s): Administrativa. Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/28 Página: 2797.

AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN AL RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL.

La omisión de los Tribunales Colegiados de Circuito de no transcribir en las sentencias que emitan al resolver los recursos de revisión



fiscal los agravios hechos valer por el recurrente, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, pues en términos del artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Federal, los mencionados recursos están sujetos a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución fija para la revisión en amparo indirecto; de modo que si el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así ni existe precepto alguno que establezca esa obligación, la falta de transcripción de los aludidos motivos de inconformidad no deja en estado de indefensión a quien recurre, puesto que son precisamente de quien provienen y, por lo mismo, obran en autos, amén de que para resolver la controversia planteada, el tribunal debe analizar los fundamentos y motivos en los que se sustenta la sentencia recurrida conforme a los preceptos legales aplicables, pero siempre con relación a los agravios expresados para combatirla.”

SÉPTIMO. Estudio de fondo

La parte actora en su escrito de demanda reclama la nulidad del cobro y correspondiente pago y devolución del Derecho de Alumbrado Público relativo al servicio número [REDACTED] aduciendo esencialmente a manera de agravios que las demandadas “...pasan por alto que la suprema corte de justicia de la nación emitió jurisprudencia declarando la inconstitucionalidad de tales preceptos por invadir la esfera de atribuciones de la federación invasión consistente en el ejercicio por autoridad local o municipal de entidad federativa de facultades reservadas o privativas de la federación y en este caso específico en cuanto a quien corresponde regular todos los aspectos de energía eléctrica ya que la propia constitución señala que es competencia exclusiva de la federación ya que corresponde a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público así como la facultad exclusiva del congreso de la unión de legislar en esta materia de donde se desprende con meridiana claridad la competencia a la federación para el abastecimiento o prestación de servicio público de Energía Eléctrica incluyendo el establecimiento de las tarifas para su venta mismas que son emitidas por la secretaria de hacienda y crédito público por lo tanto si a través de la ley de hacienda para el municipio de Colima, Colima, así como la de ingresos del mencionado municipio se está determinando que estoy obligada a contribuir para el sostenimiento del servicio de



alumbrado público en base a que la ubicación del inmueble se localiza en el municipio de Colima, Colima, ordenándole a la comisión federal de electricidad quien actúa por mandato de la ley como auxiliar del municipio el entero de la contribución en términos de lo dispuesto por los artículos del 89 al 93 de la ley de hacienda para el municipio de Colima, Colima, y su ley de ingresos vigente también para el municipio de Colima, Colima.”.

Las autoridades demandadas en su escrito de contestación de demanda señalan en lo conducente “...en relación de los agravios de la parte actora que el acto impugnado violenta sus garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14, 16 y 31, fracciones IV, 73 fracción XXIX, inciso 5°, subinciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; reclama también la aplicación de los artículos 89, 90, 91 fracción I, 92 fracción I, incisos a) y b) relativos al capítulo de servicios públicos que regulan el denominado Derecho de Alumbrado Público consignados en la Ley de Hacienda del Municipio de Colima, así como la Ley de Ingresos por cuanto a lo que prevé o hace referencia sobre la tabla o tasa para su cobro por el consumo de energía eléctrica, sin embargo no manifiesta ningún argumento tendiente a demostrar la afectación que sufre con la aplicación de los dispositivos legales referidos. Derivado de lo anterior, se concluye que los actos que se reclaman, no afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, al cual corresponde demostrar indubitablemente la titularidad del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica y su afectación por el acto reclamado, esto es, el acreditamiento del interés jurídico en sí mismo y el perjuicio padecido por tal acto. Por otro lado, debe mencionarse, que el cobro realizado por la Comisión Federal de Electricidad, quien funge como auxiliar de la administración pública, es a fin de recaudar las contribuciones que señala la ley, acatando lo que establece respecto a su obligación de retener y, posteriormente, enterar el impuesto ante las oficinas hacendarias respectiva, sin que esto implique un acto de molestia al particular que debe reunir los requisitos exigidos por el artículo 16 Constitucional, sino sólo una medida eficaz para la



recaudación del tributo. Cuando la Comisión Federal de Electricidad determina y retiene el pago por concepto de derechos de alumbrado público, aplicando para su cuantificación determinado porcentaje respecto del importe facturado del consumo de energía eléctrica mediante la emisión del aviso-recibo correspondiente, no es una autoridad para efectos del presente juicio, atento a que no crea, modifica o extingue, unilateralmente, una situación que afecte la esfera legal del particular, sino que actúa en un plano de coordinación, como auxiliar de la administración municipal, esto es, que en términos del artículo 9 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de acuerdo a la leyes municipales aplicables, no se establezcan a favor de la propia Comisión Federal de Electricidad facultades coercitivas para exigir al particular el pago de esos derechos de alumbrado público, sino, antes bien, prevean cierto procedimiento administrativo de ejecución de parte de autoridades municipales.”.

Ahora bien, bajo el paradigma de los derechos humanos y considerando el acceso a la justicia y la justicia plena se procede a realizar un estudio del acto impugnado para determinar si la autoridad demandada ajustó su actuación a derecho.

11

En esta especie, es necesario considerar el contenido de la Jurisprudencia que se reproduce a continuación:

“Época: Séptima Época. Registro: 232014. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 217-228, Primera Parte. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: Página: 11.

ALUMBRADO PUBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CODIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SON INCONSTITUCIONALES



PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACION.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República.”

12

La aplicación de la anterior Jurisprudencia resulta de carácter obligatorio para este Tribunal de conformidad con el siguiente criterio jurisprudencial:

“Época: Novena Época. Registro: 187496. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Marzo de 2002. Materia(s): Común. Tesis: VI.1o.P. J/26. Página: 1225.

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD.

Conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo: “La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decreta en Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales y federales.



..."; y esa obligatoriedad persiste hasta en tanto no exista otra tesis jurisprudencial con distinto criterio."

Así las cosas, y tomando en cuenta lo antes narrado, es claro que el derecho de alumbrado público conocido como DAP, es inconstitucional cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, siendo que en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho. En este orden de ideas, ciertamente, la Ley de Hacienda del Municipio de Colima, establece la base de dicho tributo en relación con los rangos del consumo y venta de energía eléctrica y del análisis de las documentales aportadas por la parte actora se llega a la conclusión de que con dicho criterio se recaudó la citada contribución en el caso que nos ocupa, razón por la cual debe concluirse que se trata de una contribución establecida por la legislatura local al consumo de fluido eléctrico, con lo cual se invade la esfera de facultades exclusivas de la Federación; por ende, es un punto indubitable que el cobro por parte de la autoridad demandada a través de la Comisión Federal de Electricidad del derecho de alumbrado público es ilegal en la forma en que se viene determinando en el caso que se analiza, sin que ello signifique declaración de inconstitucionalidad pues lo ponderado en esta sentencia atiende a cuestiones de legalidad.

En consecuencia, a efecto de salvaguardar el derecho de tutela judicial del accionante, la cual supone el acceso a la jurisdicción y obtención de una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución, es procedente declarar la nulidad del concepto de pago por derecho de alumbrado público a que se refiere el aviso recibo referente al servicio con número [REDACTED]

La autoridad demandada deberá realizar los trámites necesarios para que se entregue notificación escrita a la Comisión Federal de Electricidad y se realicen las gestiones necesarias para que en lo sucesivo -una vez que cause ejecutoria esta sentencia- deje de aplicar el derecho de alumbrado público respecto del citado servicio en los



términos previstos por los artículos mencionados en la demanda, es decir, que para su determinación se tome en cuenta el consumo de energía eléctrica.

Por último, cabe señalar que es improcedente la devolución de la cantidad cobrada por concepto de aplicación del derecho de alumbrado público solicitada por la parte actora, relativa al importe de [REDACTED] por dicho concepto, referidas en el mencionado aviso recibo toda vez que independientemente de que este Tribunal arribó a la conclusión de que el Derecho de Alumbrado Público, calculado en la forma en que lo establece la normatividad local resulta inconstitucional; en la especie, la parte actora omitió acompañar a su escrito de demanda el comprobante de pago expedido por la Comisión Federal de Electricidad y, de esa manera acreditar que cubrió el importe de [REDACTED] concepto de derecho de alumbrado público. Así las cosas, este órgano jurisdiccional no cuenta con los elementos de prueba para poder establecer que la parte actora pagó la cantidad que se contiene en el aviso recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, por tanto, no se puede ordenar la devolución del importe de [REDACTED] por concepto de derecho de alumbrado público solicitado por la actora en su líbelo inicial. En este contexto, cabe señalar que a través de auto de quince de julio de dos mil veinte, a la parte actora le fue formulado requerimiento a fin de que presentara la documental que ofrece como prueba consistente en: Comprobante pago de Energía Eléctrica correspondiente al número de servicio [REDACTED] apercibiéndola que en caso de no cumplir se le tendría por no admitida tal probanza, siendo el caso que por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veinte, se le hizo efectivo el apercibimiento correspondiente por lo que no se le tuvo por ofrecida a la parte actora la documental consistente en comprobante de pago de energía eléctrica correspondiente al número de servicio [REDACTED]

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 118 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima y 66 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, es de resolverse y



SE RESUELVE:

PRIMERO. Se declara la **nulidad** del concepto de pago denominado "derecho de alumbrado público", a que se refiere el aviso-recibo que fuera acompañado al escrito inicial de demanda.

SEGUNDO. Las autoridades demandadas deberán realizar los trámites necesarios a fin de que se entregue notificación escrita a la Comisión Federal de Electricidad para que a partir de que cause ejecutoria la presente sentencia, **deje de aplicar el derecho de alumbrado público** respecto del aviso-recibo referente al servicio número [REDACTED]

TERCERO. Se **absuelve** a las autoridades demandadas del pago de las cantidades que reclama la parte actora, las cuales dice haber cubierto en concepto de pago de derecho de alumbrado público.

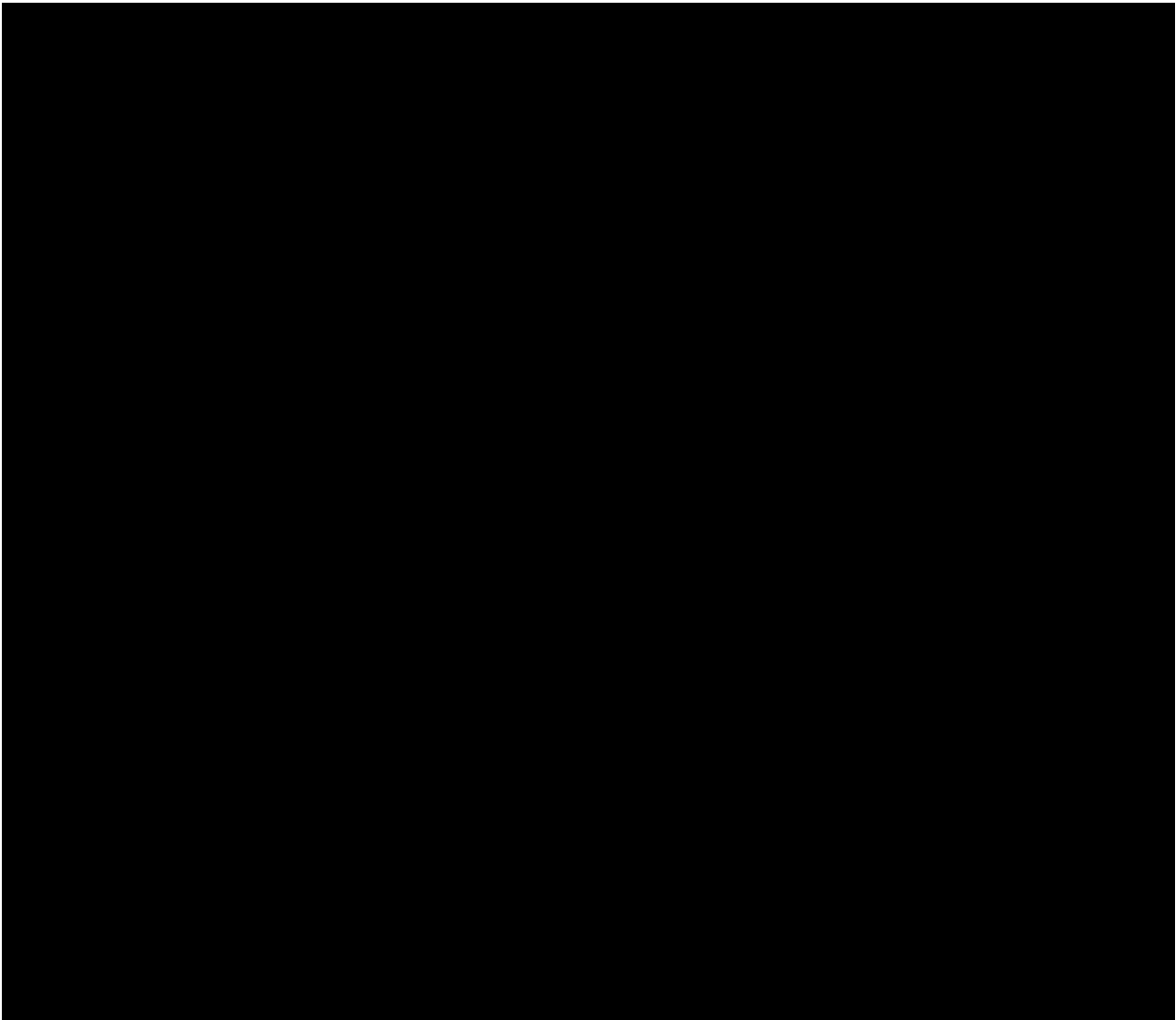
15

CUARTO. Se **vincula** a las autoridades demandadas al inmediato y diligente cumplimiento de esta resolución, apercibidas que de no hacerlo se podrán hacer acreedoras a los medios de apremio y, en su caso, a las sanciones previstas en la ley.²

Notifíquese como en derecho proceda.

Así, lo resolvieron por unanimidad y firman la Magistrada y los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

² De conformidad a lo dispuesto en el artículo 66, párrafo 2, fracción XIII, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa.



La presente hoja de firmas corresponde a la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima el día ocho de octubre de dos mil veinte, recaída dentro del expediente contencioso administrativo identificado bajo la clave TJA-334/2020-JM (impugnación de derecho de alumbrado público).



Notificada a la parte actora de la sentencia definitiva que antecede,
el día

Notificada a la autoridad demandada de la sentencia definitiva que
antecede, mediante oficio con número